El combustible del malestar: cuando el costo de la distancia enciende la crisis política

El alza del diésel no es solo un shock internacional ni un conflicto gremial aislado: es el catalizador de una tensión territorial y política acumulada que golpea con doble fuerza a las regiones extremas.

Arturo Storaker Molina • Presidente Regional UDI Magallanes | Ex Intendente Regional

+ $440 / litro	$270 a $400 / kg	2.500 litros
Alza acumulada en diésel desde julio	Flete Santiago – Punta Arenas	Consumo de diésel por viaje en ruta

Las crisis económicas y políticas rara vez comienzan con una sola causa. Suelen hacerlo cuando la presión sobre el bolsillo familiar choca con un sistema político incapaz de dar respuestas oportunas. Esta semana el detonante fue el combustible. Con una sexta alza consecutiva y un incremento acumulado en el diésel superior a los $440 por litro desde julio, las movilizaciones gremiales volvieron a paralizar las rutas. Sin embargo, en Magallanes el problema es bastante más profundo: el combustible enciende la mecha, pero el terreno seco venía acumulándose desde mucho antes.

El Gobierno ha respondido con congelamientos temporales de precios por 90 días y prórrogas en la recuperación del impuesto específico. Son medidas relevantes que deben valorarse en la coyuntura, pero no pueden confundirse con una solución estructural. Congelar tarifas o subsidiar de emergencia alivia la urgencia inmediata, pero solo posterga la discusión si el precio internacional se mantiene alto o si no se aborda la fragilidad de quienes mueven la carga en el país.

La distancia es un impuesto no escrito

En el centro de Chile, una subida del diésel encarece el flete; en Magallanes, además, se suma a miles de kilómetros, pasos fronterizos, desgaste de flota y tiempos de viaje infranqueables. La Unión de Transportistas de la región estima que el precio por kilo de carga entre Santiago y Punta Arenas pasó de alrededor de $270 a cerca de $400. En una zona austral, cada salto en el combustible no queda encerrado en la cabina del camión: viaja directo a los alimentos, la construcción y los insumos básicos que llegan a la góndola magallánica.

> *“Por eso no basta con debatir el valor nacional del combustible: Magallanes necesita una política integral de costos de distancia, contratos con fórmulas transparentes de reajuste y condiciones justas para las pequeñas empresas de transporte.”*

El MEPCO puede amortiguar la volatilidad externa, pero no puede borrar la geografía. La distancia en las regiones extremas actúa como un impuesto implícito que se paga a diario. Por ello, es imprescindible fortalecer a las pymes camioneras —de uno o dos vehículos— que operan con escaso margen de negociación y quedan expuestas a perder toda su rentabilidad antes de poder traspasar las alzas extraordinarias.

Además, el alza no golpea a todos por igual. Las grandes empresas de transporte suelen operar con algoritmos de precio que incorporan las variaciones del combustible al flete casi en tiempo real. Muchas pymes, en cambio, trabajan con tarifas rígidas y poca capacidad de reajuste, y terminan absorbiendo el alza con su propio margen. Por eso es tan difícil negociar con todo el sector en un mismo paquete: las

realidades son distintas, y una solución única termina favoreciendo a quienes ya tienen cómo protegerse.

El riesgo de la respuesta tardía y el agotamiento político

Este conflicto pone de manifiesto una dinámica recurrente en la gestión pública nacional: la tendencia a reaccionar únicamente cuando la protesta bloquea la ruta. Como analizábamos recientemente a propósito del desencanto ciudadano, el electorado chileno atraviesa por un bucle de frustración acelerada. Cuando el costo de la vida sube de forma abrupta y las soluciones del Ejecutivo o el Congreso llegan tarde o envueltas en parches de corto plazo, el malestar económico deriva inevitablemente en desconfianza hacia el sistema político en su conjunto.

Minimizar el impacto del conflicto o suponer que todo volverá a la normalidad al despejarse las carreteras sería el primer error. El segundo sería convertir la urgencia en decisiones fiscales irreversibles e improvisadas bajo presión. La política responsable exige distinguir entre un shock temporal de mercado, una estructura tributaria que requiere revisión y un problema territorial permanente que Magallanes arrastra incluso cuando el petróleo está estable.

Magallanes requiere seriedad, cifras y una conversación de largo plazo sobre conectividad, logística y zonas extremas. Evitar que el próximo aumento de costos vuelva a paralizar a la región no es solo una tarea económica; es el compromiso político básico para devolver la certeza a las familias y a los sectores productivos de nuestra región.